



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  
SALA CIVIL

Medellín, dos (2) de agosto de dos mil veintitrés (2.023)  
MAGISTRADO: JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS

Referencia: 05001 22 03 000 2023 00350 00  
Asunto: Resuelve conflicto de competencia.

ASUNTO A TRATAR

Se dirime el conflicto negativo de competencia suscitado entre los Juzgados CIVIL MUNICIPAL de Girardota, y el PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD de Bello, respecto al conocimiento del proceso ejecutivo incoado por SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. (NIT 890.903.407-9), en contra de CRISTIAN ALEJANDRO CARRASCO COTRINA (C.C. 1.121.967.350).

Aunque las diligencias también pasaron por el Juzgado SÉPTIMO CIVIL MUNICIPAL de Villavicencio (Meta) -ver archivo 17-, este Despacho no trabó conflicto alguno en los términos del inciso 1º del artículo 139 del C. G. del P., si no que dispuso enviar las diligencias a la aludida autoridad judicial de Bello, siendo esta última que en específico planteó y resolvió proponer “*CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA*” frente a su par de Girardota, y en esos términos se decide<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Es importante considerar que si bien el artículo 18 de la Ley 270 de 1996 deja en claro que; “*Los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades de la jurisdicción ordinaria que tengan distinta especialidad jurisdiccional y que pertenezcan a distintos distritos, serán resueltos por la Corte Suprema de Justicia en la respectiva Sala de Casación que de acuerdo con la ley tenga el carácter de superior funcional de las*

## CONSIDERACIONES

Inicialmente la acción en referencia correspondió al JUZGADO CIVIL MUNICIPAL de Girardota, el que la rechazó por auto del 12 de diciembre de 2.022, apoyándose en los numerales 1° y 3° del artículo 28 del C. G. del P.. Expuso que según la demanda, la competencia se radicó por el *“lugar de ocurrencia de los hechos”*, lo cual no es un lineamiento para fijarla, y como del texto de la acción y sus anexos el domicilio del demandado es Villavicencio (Meta), ordenó la remisión de las diligencias a tal ciudad.

Recibido el asunto por el Juzgado SÉPTIMO CIVIL MUNICIPAL de Villavicencio, en providencia del 10 de febrero hogaño señaló que el contrato de arrendamiento objeto de la acción ejecutiva fue celebrado en Bello (Antioquia), lugar donde también está el respectivo inmueble, conforme el numeral 3° del artículo 28 ídem, el competente es el Juez Civil de este lugar, al que dispuso el envío de la demanda. Se recalca que en tal decisión no se hizo la manifestación de *“solicitará que el conflicto se decida por el funcionario judicial que sea superior funcional común a ambos”*, por lo que como se dijo delantamente, aplica inciso 2° del artículo 18 de la Ley 270 de 1996.

Llegado el asunto al Juzgado PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD de Bello, en auto del 26 de junio anterior, adujo que no se puede confundir el concepto de domicilio con el de dirección para notificaciones, y que si bien es Bello el lugar de cumplimiento de una de las obligaciones (la de usar el inmueble arrendado), lo cierto es que

---

*autoridades en conflicto...*”, también lo es que en el caso en estudio, en estricto sentido, el conflicto se presenta *“entre autoridades de igual o diferente categoría y pertenecientes”* a este Distrito Judicial de Medellín, por lo que ha de aplicarse el inciso 2° de tal artículo.

en el introito de la demanda, expresamente se indicó que el domicilio del demandado es Girardota. En esos términos, propuso conflicto negativo de competencia, pues es el Juez de este último lugar el que debe asumir conocimiento.

Suscitado el conflicto, se decide de acuerdo con la atribución dispuesta por los artículos 35 y 139 inciso 1º, ambos del Estatuto Procesal Civil.

La jurisdicción es entendida como el poder de administrar justicia por parte del órgano Estatal –artículo 116 Constitución Nacional-, y la competencia es el modo o manera como se ejerce dicha potestad, estando esta última regulada por una serie de criterios o factores, y revestida por los principios de orden público, legalidad, imperatividad, inmodificabilidad e indelegabilidad<sup>2</sup>.

El conflicto en estudio, se origina en razón al factor territorial, y al involucrar un negocio jurídico (contrato de arrendamiento del 23 de diciembre de 2.020), la competencia es concurrente según los numerales 1º y 3º del artículo 28 del C. G. del P.<sup>3</sup>, por lo que la actora puede demandar en el domicilio del demandado (*forum domicilium reus*), o en el lugar de cumplimiento de la obligación (*forum contractui*), punto del que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, ha dicho:

*“... el accionante cuenta con la facultad de radicar su causa ante el juez, tanto del lugar de domicilio del demandado, como el*

---

<sup>2</sup> Corte Constitucional. Sentencia T-357 de 2002; Ver también AC1412-2022, Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.

<sup>3</sup> Tales normas indican: “*La competencia territorial se sujeta a las siguientes reglas:.. 1. En los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante. Cuando el demandado carezca de domicilio en el país, será competente el juez de su residencia. Cuando tampoco tenga residencia en el país o esta se desconozca, será competente el juez del domicilio o de la residencia del demandante. ... “3. En los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulación de domicilio contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita.*”. Subrayado adrede.

*perteneciente a la ubicación pactada para la satisfacción de la obligación, y una vez efectuada esa selección, adquiere carácter vinculante para las autoridades jurisdiccionales”. AC291-2018.*

Y;

*“Por eso doctrinó la Sala que el demandante, con fundamento en actos jurídicos de “alcance bilateral o en un título ejecutivo tiene la opción de accionar, ad libitum, en uno u otro lugar, o sea, en el domicilio de la contraparte o donde el pacto objeto de discusión o título de ejecución debía cumplirse; pero, insístese, ello queda, en principio, a la determinación expresa de su promotor”” Cursiva y comillas en texto original. AC1421-2022.*

En el caso que nos ocupa, la demanda se dirigió al “**JUZGADO CIVIL MUNICIPAL DE GIRARDOTA (REPARTO)**”, precisándose que el demandado es “**CRISTIAN ALEJANDRO CARRASCO COTRINA con CC 1121967350, con domicilio principal en Girardota...**”.

Entonces, la competencia quedó definida por la actora, y aunque en principio no se advierte el lugar de cumplimiento de la obligación, la alusión al domicilio basta para dirigir la acción, sin que lo referente al lugar de notificaciones del demandado<sup>4</sup>, sea razón para declarar incompetencia.

Es pertinente aclarar la diferencia entre domicilio y el lugar indicado para recibir notificaciones, punto del que la doctrina, señaló:

*“... el domicilio, entendiéndose por tal, en su acepción más amplia, como la residencia acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella, con el sitio donde puede ser notificado el demandado, ‘pues este solamente hace relación al paraje concreto, dentro de su domicilio o fuera de él, donde aquel puede ser hallado con el fin de avisarle de los actos procesales que así lo requieran’ (auto del 6 de julio de 1999), ya que suele acontecer ‘que no obstante que el demandado tenga su domicilio en un determinado lugar, se encuentre de paso (transeúnte), en otro donde puede ser hallado para efectos de enterarlo del auto*

---

<sup>4</sup> En la demanda se dijo que la dirección de notificaciones del demandado es la “**CL 2 B # 30 B - 08 MZ F CS 29, VILLAVICENCIO**”.

*admisorio de la demanda, sin que por tal razón, pueda decirse que ésta debió formularse en este sitio y no en el de su domicilio, o que éste sufrió alteración alguna”* (Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, AC5418-2018 rad. 11001-02-03-000-2018-03774-00). Ver también AC4435-2022 y AC4440-2022 de igual Corporación.

En tales términos, la determinación de la actora debe respetarse, pues tal escogencia resulta vinculante para la autoridad judicial mientras que la contraparte no exprese oposición al respecto, así lo ha entendido la Sala Civil de la alta Corporación atrás citada, al indicar:

“... el accionante cuenta con la facultad de radicar su causa ante el juez, tanto del lugar de domicilio del demandado, como el perteneciente a la ubicación pactada para la satisfacción de la obligación, y una vez efectuada esa selección, adquiere carácter vinculante para las autoridades jurisdiccionales” AC291-2018.

“En conclusión, ha reiterado la Sala que como el demandante tiene la facultad de escoger entre los distintos fueros del factor territorial, *«suficientemente se tiene dicho que una vez elegido por aquél su juez natural, la competencia se torna en privativa, sin que el funcionario judicial pueda a su iniciativa eliminarla o variarla, a menos que el demandado fundadamente la objete mediante los mecanismos legales que sean procedentes»*”. Comillas y cursiva en el texto original. AC4430-2022. Ver también AC2738-2016.

Corolario, el JUZGADO CIVIL MUNICIPAL de Girardota es el competente para conocer del trámite procesal en cuestión, por lo que se decide de conformidad.

Por lo analizado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín:

## RESUELVE

PRIMERO: Dirimir el conflicto negativo de competencia planteado, disponiendo que corresponde conocer el presente

asunto al JUZGADO CIVIL MUNICIPAL de Girardota,  
según lo motivado.

SEGUNDO: Remítase el expediente al citado Despacho, y comuníquese esta decisión a los Juzgados PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD de Bello (Antioquia), y al SÉPTIMO CIVIL MUNICIPAL de Villavicencio (Meta).

Notifíquese:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'José Omar Bohórquez Vidueñas', is written over a faint, larger signature that appears to read 'Bohórquez Vidueñas'.

JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS  
MAGISTRADO